

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

“POR LA CUAL SE RESUELVE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA AMBIENTAL”

EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS Y

CONSIDERANDO

Que por medio de oficio de la POLICIA NACIONAL- DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL SECCIONAL MONTERIA, con radicado CVS N°20231108279 y N°20231108278 del 14 de agosto de 2023, en el cual se informa a la autoridad ambiental, el proceso de incautación de carbón vegetal consistente en 144 bultos de material forestal, con un peso aproximado de 17 kg cada uno registrando un total de 2.448 kg aproximadamente, los cuales eran transportados en el vehículo de placas SKH-693, por los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513, sin el respectivo Salvoconducto que acreditara la legalidad del subproducto forestal no maderable.

Que, en atención a lo anterior, el área de seguimiento ambiental emite Concepto Técnico N°2023-1229, con fecha de 22 de agosto de 2023, y el cual fue recibido en la oficina Jurídica – CVS el 23 de agosto de 2023.

Teniendo en cuenta el concepto técnico anterior, por medio de Resolución N°3-1345 del 20 de septiembre del 2023, la CVS legalizó la medida preventiva de decomiso del subproducto forestal no maderable y abrió investigación administrativa ambiental en contra de los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513, por el presunto aprovechamiento y la movilización ilegal de carbón vegetal correspondiente a 144 bultos, con un peso aproximado de 17 kg cada uno, y el cual registró un total de 2448 kg aproximadamente, sin contar con permiso y/o autorización de la autoridad ambiental.

Es de indicar que el vehículo de placas SKH-693, en el cual se transportaban los 144 bultos de material forestal, con un peso aproximado de 17 kg cada uno y un total de 2.448 kg aproximadamente, no fue puesto a disposición de la Corporación CVS por parte de la Policía Nacional.

Que no obra en el expediente dirección del domicilio de los investigados, ni otro tipo de información, por lo que se procedió de acuerdo con lo establecido el artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, publicando la citación para la comparecencia a notificación personal de la Resolución N°3-1345 del 20 de septiembre del 2023, el día 05 de octubre de 2023, en la página web de la Corporación.

Que por no comparecer a diligencia de notificación personal se procedió a notificar por aviso a los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS**

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513, publicando copia íntegra del acto administrativo en la página electrónica de la Corporación, el día 24 de octubre de 2023.

Que la CVS, mediante Auto No. 16907 del 19 de febrero de 2024 se formuló pliego de cargos contra de los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513, por el presunto aprovechamiento y movilización ilegal de carbón vegetal correspondiente a 144 bultos, con un peso aproximado de 17 kg cada uno, y un total de 2448 kg aproximadamente, sin contar con permiso de la autoridad ambiental, ya que no aportó el salvoconducto necesario para su movilización. Trasgrediendo así lo estipulado en los artículos artículo 2.2.1.1.13.1, 2.2.1.1.7.8 del decreto 1076 de 2015 y los artículos 4, 5 y 6 de la Resolución 0753 de 2018.

Que la CVS, el 29 de febrero de 2024, realizó la citación de notificación personal por medio de página web, a los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513 del Auto No. 16907 del 19 de febrero de 2024, teniendo en cuenta que se desconoce dirección de contacto de notificación. Del mismo modo, al no comparecer a la diligencia de notificación personal, se realizó notificación por aviso en la página web de la Corporación, el día 13 de marzo de 2024.

Que, revisado el expediente ambiental, se constató que no fueron presentados escrito de descargos por parte de los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513.

Que la CVS, procedió a expedir Auto N°17033 del 15 de abril de 2024, mediante el cual se corre traslado por el término de 10 días para presentar alegatos a los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513, publicando citación de notificación personal por página web el día 18 de abril de 2024 y al no comparecer a dicha diligencia, se procedió a notificar por aviso mediante página web el día 07 de mayo de 2024, adjuntando copia íntegra del acto administrativo en mención.

Que, revisado el expediente ambiental, se constató que no fueron presentados escritos de alegatos por parte de los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

Que por lo antes mencionado, esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, procede a resolver la presente investigación por los hechos objeto de investigación consistente en el decomiso preventivo del producto forestal consistentes en 144 bultos de material forestal de carbón vegetal con un peso aproximado de 17 kg cada uno para un total de 2448 kg aproximadamente, por no contar con autorización y/o permiso de la autoridad ambiental (salvoconducto único nacional) para su aprovechamiento y movilización.

Que, en consideración a lo expuesto, la Corporación entra a evaluar las circunstancias de este caso particular y concreto con el fin de determinar si existe violación a normas de carácter ambiental.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS QUE SUSTENTAN LA COMPETENCIA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE – CVS

La Constitución Política de Colombia, consagra a lo largo de su articulado normas de estirpe ambiental en las que se erige como principio común la conservación y protección al medio ambiente, el derecho de las personas de disfrutar de un ambiente sano y la obligación radicada en cabeza del estado de proteger la biodiversidad, y siendo esta la norma de normas, según lo consagra el Artículo 4 de la misma, las normas que la desarrollen deben estar en concordancia con esta, so pena de nulidad. Dentro de los Artículos constitucionales que desarrollan aspectos de estirpe ambiental, se pueden encontrar los siguientes:

“Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.

La Ley 99 de 1993, en su Artículo 31 referente a las funciones atribuidas a La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dispone en el numeral 12 que le corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales *“ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos o gaseosos, a las aguas a cualquiera de sus formas, el aire o a poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. Estas funciones comprenden la expedición de las respectivas licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y salvoconductos.”*

Siguiendo el mismo principio de protección al medio ambiente, el Decreto 2811 de 1974, *por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente*, en su artículo 2 establece que el ambiente es patrimonio común de la humanidad necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos, en consecuencia uno de los objetivos de este Código, y de todas las autoridades ambientales es *“Lograr la preservación y restauración del ambiente y la conservación, mejoramiento y utilización racional de los recursos naturales renovables, según criterios de equidad que*

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS**

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

aseguren el desarrollo armónico del hombre y de dichos recursos, la disponibilidad permanente de estos y la máxima participación social, para beneficio de la salud y el bienestar de los presentes y futuros habitantes del territorio nacional”.

La Ley 1333 de 2009, por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, en el artículo 1, dispone que “El Estado es el titular de la potestad sancionatoria en materia ambiental y la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ***las Corporaciones Autónomas Regionales***, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a que se refiere el Artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos ambientales a que se refiere el Artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, Uaesppn, de conformidad con las competencias establecidas por la ley y los reglamentos”.

En virtud del articulado anterior, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, es la entidad investida con capacidad y competencia suficientes para adelantar el respectivo proceso sancionatorio ambiental, teniendo en cuenta que el fin que mueve su actuación es la preservación y protección del medio ambiente, garantizando con esto que los recursos naturales sean utilizados conforme a las disposiciones legales vigentes que regulan la materia como lo es el Decreto 2811 de 1974 para garantizar su disfrute y utilización.

CONSIDERACIONES DE LA CORPORACIÓN RESPECTO DE RESPONSABILIDAD EN ASUNTOS AMBIENTALES

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 1333 de 2009, al resolver la presente investigación, concerniente a declarar la responsabilidad por la ocurrencia de un hecho contraventor de la normatividad ambiental, procede esta Corporación a declarar responsable a los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513, por las razones que se explican a continuación:

Que teniendo en cuenta que obran en el expediente elementos probatorios suficientes como lo son: Concepto Técnico SGA N°2023- 1229 del 22 de agosto de 2023, oficio N.º 20231108278 del 14 de agosto de 2023 de la Policía Nacional- Dirección de Investigación Criminal e Interpol de Montería, Resolución N.º - 3 1345 de 20 de septiembre de 2023 *“por la cual se legaliza una medida preventiva, y se ordena la apertura de una investigación”* y Concepto Técnico CT 2024 – 245, de Tasación de Multa, se ha demostrado que existe una clara violación en lo que respecta a la normatividad ambiental vigente, la Ley 1333 de 2009, en su Artículo 5 dispone: *“Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el código civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción*

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS**

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil.”

Determinación de la responsabilidad. El Artículo 27 de la antes mencionada Ley consagra lo siguiente: *“Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de los descargos o al vencimiento del periodo probatorio, según el caso, mediante acto administrativo motivado, se declara o no la responsabilidad del infractor por violación de la norma ambiental y se impondrán las sanciones a las que haya lugar.”*

Se colige entonces que hay lugar a declarar responsable a un sujeto y en consecuencia hacerse acreedores a la imposición de una sanción, cuando el mismo ha cometido una infracción de carácter ambiental, ya sea por violación, por acción u omisión, de una norma ambiental (incluidos actos administrativos), o cuando se causa un daño al medio ambiente (con las mismas condiciones para la configuración de la responsabilidad civil extracontractual, esto es, la existencia de un daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos).

Elementos que configuran daño al medio ambiente: La Ley 1333 de 2009 en el Artículo 5 señala haciendo referencia a la responsabilidad por comisión de un daño al medio ambiente, que para configurar el mismo deben demostrarse los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos.

El daño al medio ambiente: En la presente investigación está dado siempre que para la obtención del producto forestal decomisado (carbol vegetal), se talaron y quemaron un número de árboles que otorgaban su oferta ambiental y ecológica, de conformidad con la información contenida en el Concepto Técnico N°2023-1229, lo cual constituye un daño ambiental indiscutible, quedando así demostrado el daño como elemento de la responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.

El hecho generador: Entendido como el comportamiento dañoso generador de la responsabilidad, que en el presente caso consiste en el aprovechamiento y movilización de producto forestal maderable de acuerdo a lo establecido en el Concepto Técnico N°2023-1229, su comercialización y movilización se efectuó sin contar con la autorización que debe ser previamente otorgada por la autoridad ambiental – léase- Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, tal como es el Salvoconducto Único Nacional, trasgrediendo entonces lo estipulado por el Decreto 1791 de 1996, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1076 de 15 de Mayo del 2015, la Resolución 0753 de 2018.

Que la Resolución 0753 de 2018, por la cual se establecen los lineamientos generales para la obtención y movilización de carbón vegetal con fines comerciales, en sus artículos establece lo siguiente:

Artículo 4 *“Fuentes de obtención de leña para producción de carbón vegetal. El carbón vegetal con fines comerciales podrá obtenerse únicamente a partir de:*

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

1. *Restos de biomasa o residuos que resulten de aprovechamientos forestales persistente y únicos de bosque natural*
2. *Restos de biomasa o de leña que resulten del aprovechamiento forestal de cercas vivas, barreras rompevientos, árboles de sombrío, arboles aislados de bosque natural y árboles aislados fuera de la cobertura de bosque natural.*
3. *Restos de biomasa, residuos o leña que resulten de la tala, posa, soqueo, o raleo de las especies frutales con características leñosas.*
4. *Restos de biomasa, residuos o leña que resulten del aprovechamiento forestal de arbolado urbano, provenientes de solicitudes prioritarias, tal de emergencia o tala por obra pública o privada.*
5. *Restos de biomasa, residuos o leña que resulten de la tala, poda, soqueo, o raleo de las especies frutales con características leñosas.*
6. *Restos de biomasa, leña o productos que resulten de la poda, raleo, limpiezas y de aprovechamiento de árboles caídos o muertos de plantaciones forestales protectoras – productoras.*
7. *Restos de biomasa, residuo o leña que resulten del aprovechamiento forestal de cultivos forestales con fines comerciales y de plantaciones forestales protectoras – productoras establecidas en el CIF de Reforestación de que trata la Ley 139 de 1994.*
8. *Restos de biomasa o residuos que resulten de la transformación de productos maderables de transformación primaria en las empresas forestales.*
9. *restos de biomasa o residuo de productos maderables que se obtengan de otros sectores productivos, como estibas y huacales, y otros similares.*

Que el artículo 5. De la misma resolución consigna: *“Requisitos para la obtención de leña para producir carbón vegetal. El interesado en obtener leña para producir carbón vegetal, deberá especificar en la solicitud que presenta ante la autoridad ambiental competente:*

1. *La fuente de obtención de leña para producción de carbón vegetal;*
2. *El volumen de leña expresada en metros cúbicos (m3) que pretende someter al proceso de carbonización; y*
3. *La cantidad expresada en kilogramos que pretende obtener de carbón vegetal.*

Parágrafo 1. El volumen de leña expresada en metros cúbicos que pretende someter el usuario al proceso de carbonización y la cantidad expresada en kilogramos que pretende obtener de carbón vegetal, quedará establecida en el acto administrativo motivado de obtención de leña para producir carbón vegetal.”

El artículo 6 de la citada Resolución consigna: *“Requisitos para la movilización de carbón vegetal. Todo aquel que esté interesado en transportar carbón vegetal con fines comerciales, deberá contar con el respectivo Salvoconducto Único Nacional expedido por la autoridad ambiental competente, de conformidad con lo señalado en el Libro 2, Parte 2, capítulo 1 de la sección 13 del Decreto 1076 de 2015, la Resolución 1909 de 2017, modificada por Resolución N° 081 de 2018, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.*

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS**

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

A su vez el artículo 10 nos indica: *“incumplimiento. El incumplimiento de las normas previstas en la presente resolución, dará la aplicación del procedimiento sancionatorio ambiental establecido por la Ley 1333 de 2009 y demás normas que modifiquen o deroguen; sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar”.*

En cuanto al vínculo o nexo causal: entendido este como la relación existente entre el resultado y la acción, que permite afirmar que el daño ha sido producido por la acción, en el presente caso se encuentra en que el daño al medio ambiente, como se dijo comprendido en el literal A del artículo 8 del Decreto – Ley 2811 de 1974, es generado por la contaminación del aire, de las aguas, del suelo y de los demás recursos naturales renovables. Se entiende por contaminación la alteración del ambiente con sustancias o formas de energía puestas en él, por actividad humana o de la naturaleza, en cantidades, concentraciones o niveles capaces de interferir el bienestar y la salud de las personas, atentar contra la flora y la fauna, degradar la calidad del ambiente o de los recursos de la nación o de los particulares.

Así mismo se contempla que en materia ambiental la culpa y dolo se presumen y es al presunto infractor al que le corresponde desvirtuar dicha presunción con las pruebas y los argumentos desplegados en su escrito de descargos y alegatos con el fin de convencer a la autoridad ambiental de la no ejecución de la acción u omisión de la conducta sancionada o de la constitución de alguna causal de eximente de responsabilidad, situaciones que no fueron demostrados por parte de los investigados dentro del procedimiento sancionatorio ambiental adelantado en su contra por la CAR – CVS, puesto que no presentaron escrito de descargos o alegatos, pese a que fueron debidamente notificados de los actos administrativos que daban la oportunidad de presentarlos.

Lo anterior se sustenta en el hecho de que se demostró el hecho contraventor en materia ambiental como lo es el aprovechamiento y movilización ilegal de carbón vegetal correspondiente a 144 bultos de material forestal de carbón vegetal con un peso aproximado de 17 kg cada uno, sin contar con permiso de la autoridad ambiental.

Luego entonces el actuar de la Corporación, no es otro distinto que la del cuidado del medio ambiente y el deber legal y constitucional de protección y preservación de los recursos naturales y sobre la prevención del deterioro ambiental.

Se tiene entonces que hay lugar a declarar responsable a un sujeto y en consecuencia hacerse acreedor a la imposición de una sanción cuando el mismo ha cometido una infracción de carácter ambiental, ya sea por la violación, por acción u omisión, de una norma ambiental (incluidos actos administrativos), o cuando se causa un daño al ambiente (con las mismas condiciones para la configuración de la responsabilidad civil extracontractual, esto es, la existencia de un daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos).

Con la conducta mencionada objeto de investigación, además de la afectación ambiental, se genera responsabilidad por infringir las referidas normas, citadas así: Decreto – Ley 2811 de 1974, Decreto 1076 de 2015 y otras disposiciones.

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS**

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

El fin que persigue la norma, al disponer que para la ejecución de este tipo de actividades se requiera la previa autorización de la autoridad ambiental, radicada precisamente en que a esta se le encomendó por mandato legal, Ley 99 de 1993, la protección de los recursos naturales y del medio ambiente. Por lo tanto, la Corporación debe realizar pronunciamiento acerca de la viabilidad o no, del aprovechamiento que se pretende efectuar, teniendo en cuenta circunstancias como el impacto ambiental que se genera con ese tipo de actividades, así como las medidas compensatorias a que haya lugar tomar, en caso de ser requeridas. De lo anterior da cuenta el Concepto Técnico N° 2023 – 1229, generado por los funcionarios de la Subselección Sinú medio. Así queda demostrado el elemento relativo al hecho generador de responsabilidad como elemento de la responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley 1333 de 2009.

Una vez establecida la responsabilidad de los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513, por haber causado un daño ambiental, se procede a analizar a continuación si este además incurrió en infracción ambiental por violación, por acción u omisión, de una norma ambiental.

En lo atinente a la violación de una norma, ya al explicar el elemento de la responsabilidad referente al hecho generador, se pudo identificar que por parte de los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513, hay una clara vulneración de la normatividad ambiental, toda vez que no presentaron ante la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, solicitud de aprovechamiento de productos de flora silvestre con fines comerciales, ni salvoconductos que ampararan la movilización de dicho subproducto, faltando así a lo indicado en el artículo 5 y 6 de la Resolución 0753 de 2018.

Por el análisis efectuado la Corporación encuentra responsable a los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513, por los hechos objeto de investigación, por cometer una infracción ambiental consistente en la comisión de un hecho contraventor por aprovechamiento y movilización ilegal de producto forestal con fines comerciales sin contar con la autorización de la autoridad ambiental (Salvoconducto Único Nacional en Línea).

De igual manera, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, con relación a la tasación de la sanción, a través de funcionarios competentes de la División de Calidad Ambiental, emitió **CONCEPTO TECNICO CT 2024 - 245**, por el cual se calcula multa ambiental a los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS**

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

con cédula número 11.003.513, por los hechos objeto de investigación, por cometer una infracción ambiental consistente en la comisión de un hecho contraventor por aprovechamiento y movilización ilegal de producto forestal con fines comerciales sin contar con la autorización de la Autoridad Ambiental.

FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCION DE CARÁCTER AMBIENTAL

Dando expreso cumplimiento a las normas sobre protección ambiental de los recursos naturales, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, entidad competente en asuntos ambientales, encuentra procedente y pertinente la imposición de una sanción a los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513, por los hechos contraventores objeto de la presente investigación.

Cuando ocurriere la violación de las normas sobre protección ambiental o sobre manejo de recursos naturales renovables, las Corporaciones Autónomas Regionales impondrán las sanciones.

La Constitución Política de Colombia en el Artículo 80, el cual dispone lo siguiente: *“El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”*.

La Ley 1333 de 2009 en el Artículo 40 contiene lo referente a las sanciones que la autoridad competente, en el caso, Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS debe imponer al infractor de normas ambientales, como consecuencia de su actuación.

“Artículo 40 de la Ley 1333 de 2009: Las sanciones señaladas en este artículo se impondrán como principales o accesorias al responsable de la infracción ambiental. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales, las de Desarrollo Sostenible, las Unidades Ambientales de los grandes centros urbanos a los que se refiere el artículo 66 de la Ley 99 de 1993, los establecimientos públicos que trata el artículo 13 de la Ley 768 de 2002 y la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, impondrán al infractor de las normas ambientales, de acuerdo con la gravedad de la infracción mediante resolución motivada, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

- 1. Multas diarias hasta por cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.*
- 2. Cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.*
- 3. Revocatoria o caducidad de licencia ambiental, autorización, concesión, permiso o registro.*
- 4. Demolición de obra a costa del infractor.*

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS**

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

5. *Decomiso definitivo de especímenes, especies silvestres exóticas, productos y subproductos, elementos, medios o implementos utilizados para cometer la infracción.*
6. *Restitución de especímenes de especies de fauna y flora silvestres.*
7. *Trabajo comunitario según condiciones establecidas por la autoridad ambiental.”*

Y en el párrafo 1 del Artículo 40 establece: *“PARÁGRAFO 1o. La imposición de las sanciones aquí señaladas no exime al infractor de ejecutar las obras o acciones ordenadas por la autoridad ambiental competente, ni de restaurar el medio ambiente, los recursos naturales o el paisaje afectados. Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales y disciplinarias a que hubiere lugar.”*

Ahora bien, para determinar la sanción a imponer en este caso en particular se ha realizado la ponderación de los hechos del caso determinándose que:

Una vez establecida la procedencia ilegal del producto forestal, por no estar amparado con un permiso de aprovechamiento expedido por la autoridad competente, se procederá a dar cumplimiento en lo establecido en el Artículo 41 de la Ley 1333 de 2009, en consecuencia, se impondrá sanción de decomiso definitivo del producto forestal a los investigados.

Adicionalmente, se procederá a valorar si la Corporación debe imponer al propietario de la sanción consistente en multa, análisis que se concreta así:

La Ley 1333 de 2009 ha contemplado una sanción de gran importancia para los propietarios de los elementos, medios e implementos utilizados para infringir las normas ambientales.

Es así como en el Artículo 47 IBIDEM indica: *“decomiso definitivo de productos, elementos, medios implementados o utilizados para cometer la infracción. Consiste en la aprehensión material y definitiva de los productos, elementos utilizados para infringir las normas ambientales.*

Una vez decretado el decomiso definitivo, la autoridad ambiental podrá disponer de los bienes para el uso de la entidad o entregarlos a entidades públicas para facilitar el cumplimiento de sus funciones, a través de convenios interinstitucionales que permitan verificar la utilización correcta”.

Es importante anotar que dicha norma fue declarada exequible mediante Sentencia de la Corte Constitucional C – 364 de 2012, en la cual se sostuvo por parte del órgano constitucional:

...”El alcance que la jurisprudencia constitucional ha dado a este Artículo, en especial a lo relacionado con los cargos objeto de estudio, puede resumirse así: “ (...) el derecho a la propiedad -como todos los derechos constitucionales- no tiene un carácter absoluto o intangible y puede ser limitado cuando no se aviene a las reglas impuestas en el ordenamiento especialmente (i) cuando no cumple la función social o ecológica que está llamada a prestar, (ii) cuando su adquisición no se ajuste a las previsiones de la normativa vigente y (iii) cuando entra en conflicto evidente con el interés general u otros derechos constitucionales y, después de una adecuada ponderación, en el caso en concreto se hace necesario limitarlo”.

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS**

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

Luego de un estudio sobre el decomiso administrativo en la jurisprudencia constitucional, se presentaron las siguientes conclusiones:

...“El decomiso administrativo definitivo como sanción ambiental responde a un fin constitucionalmente admisible como lo es la preservación del medio ambiente, es adecuado para cesar la infracción ambiental y/o evitar la consumación de un daño al medio ambiente siempre que su imposición sea el resultado del debido proceso administrativo descrito y su aplicación responda a los principios de proporcionalidad y excepcionalidad. Adicionalmente, la decisión sancionatoria de la autoridad administrativa puede impugnarse ante la jurisdicción contenciosa administrativa en garantía del acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de propiedad” ...

...” Concretamente, se reitera que la garantía constitucional e interamericana al derecho de propiedad está sujeta a limitaciones que deben ser determinadas por el legislador, pueden provenir de criterios relacionados con el interés social, la utilidad pública o la función social o ecología que cumpla. En consecuencia, el decomiso administrativo definitivo se enmarca dentro de las limitaciones permitidas del derecho de propiedad por que ha sido definida por el legislador, en el Artículo 47 de la Ley 1333 de 2009, y responde a una medida de interés social como lo es la salvaguarda del medio ambiente en cumplimiento de la función ecológica de la propiedad”.

...”El decomiso administrativo no tiene por objeto sancionar la forma de adquisición del bien, como sucede con la figura de la extinción de dominio, si no la inobservancia de la norma que proscribe determinadas conductas o que impone algunas exigencias a los administrados, es decir, la inobservancia de una obligación legal”...

“Por consiguiente, la Corte avalo en el juicio de constitucionalidad la sanción de decomiso administrativo definitivo, siempre que sea el resultado de la comisión de una infracción administrativa regulada por el legislador e impuesta con observancia del debido proceso”.

Ahora bien, esta Corporación y luego de hacer un juicio de proporcionalidad de conformidad con lo explicado ampliamente en la jurisprudencia citada:

“4.5.4. El principio de proporcionalidad. La sanción de decomiso debe ser proporcional a la falta o infracción administrativa que se busca sancionar. Por su naturaleza, el decomiso de carácter administrativo debe ser de carácter excepcional. Así el bien a decomisar debe tener una relación directa con la infracción administrativa, de modo que la privación del derecho de propiedad se justifique bien por razones de seguridad personal o económica que por su lesividad se requiere retirarlos de circulación para prevenir o evitar que se siga causando un daño”(...

Artículo 43 consagra: MULTA. “Consiste en el pago de una suma de dinero que la autoridad ambiental impone a quien con su acción u omisión infringe las normas ambientales.”

Para la tasación de la multa la Oficina Jurídica Ambiental de la Corporación solicitó a la Subdirección de Gestión Ambiental, concepto técnico de cálculo de multa ambiental por el aprovechamiento y movilización ilegal de productos forestales maderables, (carbón vegetal) de lo cual se indicó lo siguiente:

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS**

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

“CONCEPTO TÉCNICO ALP 2024 – 245

De acuerdo a lo descrito en el concepto técnico 2023 - 1229 presentado por profesionales adscritos a La Subdirección de Gestión Ambiental de la CVS, a las pruebas expuestas en los mismos, y tomando como base el MANUAL CONCEPTUAL Y PROCEDIMENTAL DE LA METODOLOGÍA PARA EL CALCULO DE MULTAS POR INFRACCIÓN A LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL del MADS, se procedió a realizar la Tasación de la Multa Económica a la que debe hacerse acreedor el posible infractor una vez determinada su responsabilidad en las afectaciones realizadas a los Recursos Naturales y el Ambiente, y conforme al concepto que emita la Unidad de Jurídica Ambiental teniendo en cuenta que la multa es una sanción que debe actuar como un disuasivo del comportamiento, buscando reducir los incentivos a no cumplir con las normas y las reglas establecidas. Dicho valor se calculó basado en los siguientes preceptos:

$$\text{Multa} = B + [(\alpha + i)(1 + A) + Ca] \cdot Cs$$

En donde:

B: Beneficio ilícito

α : Factor de temporalidad

A: Circunstancias agravantes y atenuantes

i: Grado de afectación ambiental

Ca: Costos asociados

Cs: Capacidad socioeconómica del infractor y/o evaluación del riesgo

CÁLCULO Y ASIGNACIÓN DE VALORES A LAS VARIABLES

❖ Beneficio Ilícito (B)

- El cálculo de la variable **BENEFICIO ILÍCITO** tomándolo como la ganancia económica que podría obtener el infractor fruto de su conducta se determinó teniendo en cuenta los **Ingresos Directos** los **Costos Evitados** (ahorro económico o ganancia percibida por el infractor al incumplir o evitar las inversiones exigidas por la norma ambiental y/o los actos administrativos) y los **Ahorros de Retraso** (Referidos especialmente a la rentabilidad que percibiría la inversión que se deja de realizar al infringir la norma) y el cálculo de la Capacidad de Detección de la Conducta por parte de la Autoridad Ambiental.
- El Beneficio Ilícito se determina conforme a la siguiente ecuación:

$$B = \frac{y \times (1 - p)}{p}$$

Donde: **B** = Beneficio Ilícito

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

y = Sumatoria de Ingresos directos, Costos Evitados y Ahorro de Retraso

p = Capacidad de detección de la Autoridad Ambiental

Por lo tanto:

- A. Realmente el cálculo de los **Ingresos Directos** para este evento no puede tasarse, debido a que los señores, Julio Alberto Ortiz Simanca identificado con cédula de ciudadanía No. 1.068.658.742, Omar González Castro identificado con cédula de ciudadanía No. 78.077.738 y Jorge Luis Caballero Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 11.003.513, no recibieron de forma efectiva el ingreso de un recurso, por esta razón no se determina valor monetario.
- B. Para el cálculo de los **Costos Evitados**, se tienen en cuenta los recursos que los señores, Julio Alberto Ortiz Simanca identificado con cédula de ciudadanía No. 1.068.658.742, Omar González Castro identificado con cédula de ciudadanía No. 78.077.738 y Jorge Luis Caballero Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 11.003.513, debieron invertir para tramitar los respectivos permisos, para lo cual se requiere de unos pagos por servicio de evaluación y seguimiento por valor de \$104.756.
- C. Para el presente ejercicio no es posible determinar el **Ahorro por Retraso**, debido a que el presunto infractor no cumplió con la norma ambiental de movilización, razón por la cual no hubo retrasos de la que se pudiera determinar una utilidad por parte de los infractores. En tal sentido el Ahorro por Retraso se determina como **CERO (\$0)**.
- **Capacidad de Detección de la Conducta:** Teniendo en cuenta que el hecho ilícito es detectado por actividades de control que realiza la policía nacional, en el Departamento de Córdoba, lo cual es corroborado por visitas de inspección y valoración que realiza la Corporación y que la probabilidad de ser detectado depende de esta observación en campo y de las denuncias por parte de la comunidad y/o cualquier otro ente de control, la capacidad de detección es Alta y por ende se le asigna un valor de **CERO PUNTO CINCO (0.5)**.
- Una vez calculadas todas las variables posibles finalmente se determina el Valor del **BENEFICIO ILÍCITO** mediante la fórmula incluida al inicio de este documento.

$$B = \frac{y \times (1 - p)}{p}$$

(y1)	Ingresos directos	0	\$104.756,00	= y
(y2)	Costos evitados	\$104.756,00		
(y3)	Ahorros de retraso	0		

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

(p)	Capacidad de detección de la conducta	Baja = 0,40	0,5	= p
		Media = 0,45		
		Alta = 0,50		

B = \$ 104.756,00

El valor aproximado calculado del **beneficio ilícito** por parte de los señores, Julio Alberto Ortiz Simanca identificado con cédula de ciudadanía No. 1.068.658.742, Omar González Castro identificado con cédula de ciudadanía No. 78.077.738 y Jorge Luis Caballero Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 11.003.513, por el aprovechamiento y movilización ilícita del producto forestal no maderable (Carbón Vegetal), correspondiente a un volumen de dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho (2.448) kilogramos, consistentes en ciento cuarenta y cuatro (144) bultos del producto, de diecisiete (17) kg cada uno, sin contar con la autorización y/o permiso de la autoridad ambiental para ello, es de **CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$104.756,00)**.

❖ **Factor de Temporalidad (α)**

Factor de temporalidad	Número de días continuos o discontinuos durante los cuales sucede el ilícito (Entre 1 y 365)	1
	$\alpha = (3/364) * d + (1 - (3/364))$	1,00

❖ **Valoración de la importancia de la afectación (i)**

$$I = (3IN) + (2EX) + PE + RV + MC$$

Para la valoración de la importancia de la afectación se emplean los siguientes atributos:

- Intensidad (IN)
- Extensión (EX)
- Persistencia (PE)
- Reversibilidad (RV)
- Recuperabilidad (MC)

AFECTACIÓN AMBIENTAL

- **Grado de afectación ambiental:**

Para la estimación de esta variable se estimó la importancia de la afectación mediante la calificación de cada uno de los atributos, atendiendo a los criterios y valores

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

determinados en la Resolución No. 2086 del MAVDT, en el Manual Conceptual y Procedimental de la Metodología para el Cálculo de Multas por Infracción a la Normatividad Ambiental, y basándose en la evaluación de las pruebas recogidas y la visita realizada al lugar de afectación. Los atributos evaluados y su ponderación, luego de realizada la matriz de interacción medio – acción se pueden identificar como sigue:

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
<i>Intensidad (IN)</i>	<i>Define el grado de incidencia de la acción sobre el bien de protección</i>	<i>Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 0 y 33%.</i>	<i>1</i>
		<i>Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 34% y 66%.</i>	<i>4</i>
		<i>Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 67% y 99%.</i>	<i>8</i>
		<i>Afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma igual o superior o al 100%</i>	<i>12</i>
		IN	1

El valor de la Intensidad se pondera en 1 debido a que la afectación de bien de protección representada en una desviación del estándar fijado por la norma y comprendida en el rango entre 0% y 33%.

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
<i>Extensión (EX)</i>	<i>Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno</i>	<i>Cuando la afectación puede determinarse en un área localizada e inferior a una (1) hectárea.</i>	<i>1</i>
		<i>Cuando la afectación incide en un área determinada entre una (1) hectárea y cinco (5) hectáreas</i>	<i>4</i>
		<i>Cuando la afectación se manifiesta en un área superior a cinco (5) hectáreas.</i>	<i>12</i>
		EX	1

El valor de la extensión se pondera en 1 debido a que la afectación incide en un área localizada e inferior a una (1) hectárea.

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
<i>Persistencia (PE)</i>	<i>Se refiere al tiempo que</i>	<i>Si la duración del efecto es inferior a seis (6) meses.</i>	<i>1</i>

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

	<i>permanecería el efecto desde su aparición y hasta que el bien de protección retorne a las condiciones previas a la acción</i>	<i>Cuando la afectación no es permanente en el tiempo, se establece un plazo temporal de manifestación entre seis (6) meses y cinco (5) años.</i>	3
		<i>Cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los bienes de protección o cuando la alteración es superior a 5 años.</i>	5
		PE	1

El valor de la persistencia se pondera en 1 ya que la duración del efecto es inferior a seis (6) meses

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
<i>Reversibilidad (RV)</i>	<i>Capacidad del bien de protección ambiental afectado de volver a sus condiciones anteriores a la afectación por medios naturales, una vez se haya dejado de actuar sobre el ambiente.</i>	<i>Cuando la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en un periodo menor de 1 año.</i>	1
		<i>Aquel en el que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en el mediano plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. Es decir, entre uno (1) y diez (10) años.</i>	3
		<i>Cuando la afectación es permanente o se supone la imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a sus condiciones anteriores. Corresponde a un plazo superior a diez (10) años.</i>	5
		RV	3

El valor de la reversibilidad se pondera en 3 ya que la alteración puede ser asimilada por el entorno de forma medible en el mediano plazo, es decir, entre uno (1) y diez (10) años.

Atributos	Definición	Calificación	Ponderación
<i>Recuperabilidad (MC)</i>	<i>Capacidad de recuperación del bien de protección por medio de la implementación de medidas de gestión ambiental.</i>	<i>Si se logra en un plazo inferior a seis (6) meses.</i>	1
		<i>Caso en que la afectación puede eliminarse por la acción humana, al establecerse las oportunas medidas correctivas, y así mismo, aquel en el que la alteración que sucede puede ser compensable en un periodo comprendido entre 6 meses y 5 años.</i>	3
		<i>Caso en que la alteración del medio o pérdida que supone es imposible de reparar, tanto por la acción natural como por la acción humana.</i>	10

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

		MC	1
--	--	-----------	----------

La recuperabilidad se pondera en 1 debido a que la capacidad de recuperación del bien al implementar medidas de gestión ambiental se logra en un plazo inferior a seis (6) meses.

La importancia de la afectación se define en la siguiente ecuación:

$$(I) = (3*IN)+(2*EX)+PE+RV+MC$$

$$(I) = (3*1)+(2*1)+1+3+1$$

$$(I) = 10$$

*La importancia de la afectación se encuentra en el rango de 9-20, es decir, una medida cualitativa de impacto **LEVE**.*

Teniendo en cuenta que los señores, Julio Alberto Ortiz Simanca identificado con cédula de ciudadanía No. 1.068.658.742, Omar González Castro identificado con cédula de ciudadanía No. 78.077.738 y Jorge Luis Caballero Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 11.003.513, por el aprovechamiento y movilización ilícita del producto forestal no maderable (Carbón Vegetal), correspondiente a un volumen de dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho (2.448) kilogramos, consistentes en ciento cuarenta y cuatro (144) bultos del producto, de diecisiete (17) kg cada uno, sin contar con la autorización y/o permiso de la autoridad ambiental para ello, se puede generar afectación a los recursos naturales, razón por la cual el grado de afectación ambiental se determinó por medio de la evaluación de riesgo como se describe a continuación:

Determinación del riesgo:

Probabilidad de Ocurrencia (o):

Para determinar la probabilidad de ocurrencia de la afectación, el equipo de profesionales de la autoridad ambiental debe evaluar y sustentar la posibilidad de que ocurra y de acuerdo con la experticia, se debe clasificar de acuerdo a la siguiente tabla:

Probabilidad de Ocurrencia	
Criterio	Valor de probabilidad de ocurrencia
Muy alta	1
Alta	0.8
Moderada	0.6
Baja	0.4
Muy baja	0.2

*Para lo cual se tomó el valor de **0,4** para una probabilidad de ocurrencia Muy Baja, teniendo en cuenta que el cumplimiento depende del compromiso de la persona, y puede*

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

evitar incurrir nuevamente en la infracción que puede representar una afectación ambiental.

Magnitud Potencial de la afectación (m):

La magnitud o nivel potencial de la afectación se puede calificar como irrelevante, leve, moderado, severo o crítico, de acuerdo a la valoración de la importancia de la afectación, como se muestra en la siguiente tabla:

Criterio de valoración de afectación	Importancia de la afectación	Nivel potencial de impacto
Irrelevante	8	20
Leve	9-20	35
Moderado	21-40	50
Severo	41-60	65
Crítico	61-80	80

De acuerdo a la importancia de la afectación calculada anteriormente en **10**, la magnitud potencial de impacto se determina en 35 es decir **LEVE**.



Donde;

r= Riesgo

o= probabilidad de ocurrencia de la afectación

m= Magnitud potencial de la afectación

$$r = 0,4 \times 35$$

$$r = 14$$

De acuerdo a la siguiente tabla:

Probabilidad / Afectación	Irrelevante	Leve	Moderado	Severo	Crítico
Muy alta [1]	20	35	50	65	80
Alta [0.8]	16	28	40	52	64
Moderada [0.6]	12	21	30	39	48
Baja [0.4]	8	14	20	26	32
Muy baja [0.2]	4	7	10	13	16

La valoración del riesgo se establece en **14** es decir, como **BAJA**.

Una vez se realiza la valoración del riesgo se procede, a monetizar mediante la siguiente relación:

$$R = (11,03 \times SMMLV) * (I)$$

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

En donde:

R= Valor monetario de la importancia del riesgo

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (pesos)

I= Importancia de la Afectación.

Reemplazando en la formula los valores:

$$i = (11.03 * \$1.300.000) * (10)$$

$$i = \$143.390.000,00 \text{ Pesos.}$$

*El Valor monetario de la importancia de la Afectación al reemplazar en la formula los valores correspondientes, dio como resultado la suma de: **CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS, MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$143.390.000,00).***

❖ **Circunstancias Agravantes y Atenuantes (A)**

Las circunstancias atenuantes y agravantes son factores que están asociados al comportamiento del infractor.

La Ley 1333 de 2009 – por medio de la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental – establece las circunstancias agravantes y atenuantes de la responsabilidad en materia ambiental.

De la determinación de estas circunstancias, hacen parte los antecedentes y pronunciamientos previos de las autoridades ambientales en relación con el tema, así como las evidencias recogidas durante el seguimiento que se realiza al cumplimiento de las obligaciones y, las conductas atribuibles a los infractores.

Para este caso concreto, los señores, Julio Alberto Ortiz Simanca identificado con cédula de ciudadanía No. 1.068.658.742, Omar González Castro identificado con cédula de ciudadanía No. 78.077.738 y Jorge Luis Caballero Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 11.003.513, no han incurrido en agravantes, razón por la cual:

A=0

❖ **Costos Asociados (Ca)**

La variable costos asociados, corresponde a aquellas erogaciones en las cuales incurre la autoridad ambiental durante el proceso sancionatorio y que son responsabilidad del infractor. Estos costos son diferentes aquellos que le son atribuibles a la autoridad ambiental en ejercicio de la función policiva que le establece la Ley 1333 de 2009 y en el deber constitucional de prevenir, controlar y sancionar, es decir, los gastos que ocasione la práctica de una prueba serán a cargo de quien la solicite. (Manual conceptual y

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

procedimental, Metodología para el cálculo de multas por infracción a la normatividad ambiental).

Para este cálculo de multa, los señores, Julio Alberto Ortiz Simanca identificado con cédula de ciudadanía No. 1.068.658.742, Omar González Castro identificado con cédula de ciudadanía No. 78.077.738 y Jorge Luis Caballero Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 11.003.513, no han incurrido en Costos Asociados, por lo que:

Ca= 0

❖ Capacidad Socioeconómica del Infractor (Cs)

Teniendo en cuenta la información consultada en diferentes entidades y teniendo en cuenta la actividad desarrollada por los señores, Julio Alberto Ortiz Simanca identificado con cédula de ciudadanía No. 1.068.658.742, Omar González Castro identificado con cédula de ciudadanía No. 78.077.738 y Jorge Luis Caballero Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 11.003.513, se encuentran en categoría de estrato 1.

Nivel SISBEN	Capacidad Socioeconómica
1	0,01
2	0,02
3	0,03
4	0,04
5	0,05
6	0,06
Poblaciones desplazadas, indígenas y desmovilizadas por ser población especial no poseen puntaje, ni nivel.	0,01

La Ponderación se sitúa en 0,01.

TASACIÓN MULTA

Luego de realizado el cálculo de todas las variables que podrían intervenir en la tasación de la multa a imponer a los señores, Julio Alberto Ortiz Simanca identificado con cédula de ciudadanía No. 1.068.658.742, Omar González Castro identificado con cédula de ciudadanía No. 78.077.738 y Jorge Luis Caballero Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 11.003.513, por el aprovechamiento y movilización ilícita del producto forestal no maderable (Carbón Vegetal), correspondiente a un volumen de dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho (2.448) kilogramos, consistentes en ciento cuarenta y cuatro (144) bultos del producto, de diecisiete (17) kg cada uno, sin contar con la autorización y/o permiso de la autoridad ambiental para ello, vulnerando así lo establecido en el decreto 1076 de 2015, se presenta a continuación la Tabla resumen y el Monto

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

aproximado a imponer como multa al infractor una vez sea determinada completamente su responsabilidad en las actividades ilegales evaluadas.

El Monto Total de la Multa se determina mediante la aplicación de la siguiente formula una vez que se cuenta con los valores de todas las variables evaluadas en el presente documento:

$$Multa = B + [(\alpha * i) * (1 + A) + Ca] * Cs$$

Donde:

B:	Beneficio ilícito	A:	Circunstancias agravantes y atenuantes
α :	Factor de temporalidad	Ca:	Costos asociados
i:	Grado de afectación ambiental y/o evaluación del riesgo	Cs:	Capacidad socioeconómica del infractor.

VALOR DE MULTA:

B: \$104.756,00

α : 1,00

A: 0

i: \$143.390.000,00

Ca: 0

Cs: 0,01

MULTA= \$104.756+ [(1,00*\$127.948.000)*(1+0)+0]*0,01

MULTA=\$1.538.656,00

En la siguiente tabla se presenta el resumen de todos los valores calculados y se determina el Monto Total de la Multa a Imponer.

Tabla resumen Calculo Multa Julio Ortiz – Omar González – Jorge Caballero

ATRIBUTOS EVALUADOS		VALORES CALCULADOS
BENEFICIO ILÍCITO	Ingresos Directos	0
	Costos Evitados	\$104.756,00
	Ahorros de Retrasos	0
	Capacidad de Detección	0,5
TOTAL BENEFICIO ILÍCITO		\$104.756,00

AFECTACIÓN AMBIENTAL	Intensidad (IN)	1
	Extensión (EX)	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

	<i>Persistencia (PE)</i>	1
	<i>Reversibilidad (RV)</i>	1
	<i>Recuperabilidad (MC)</i>	1
	<i>Importancia (I)</i>	8
	<i>SMMLV</i>	\$1.300.000
	<i>Factor de Monetización</i>	11,03
TOTAL MONETIZACIÓN AFECTACIÓN AMBIENTAL		\$143.390.000,00

FACTOR DE TEMPORALIDAD	<i>Periodo de Afectación (Días)</i>	1
	FACTOR ALFA (TEMPORALIDAD)	1,00

AGRAVANTES Y ATENUANTES	<i>Factores Atenuantes</i>	0
	<i>Factores Agravantes</i>	0
TOTAL AGRAVANTES Y ATENUANTES		0

COSTOS ASOCIADOS	<i>Trasporte, Seguros, Almacén, etc.</i>	\$ 0
	<i>Otros</i>	\$0
TOTAL COSTOS ASOCIADOS		\$0

CAPACIDAD SOCIOECONÓMICA	<i>Persona Natural</i>	<i>Nivel Sisbén 1</i>
	<i>Valor Ponderación CS</i>	0,01

MONTO TOTAL CALCULADO MULTA		\$1.538.656,00
--	--	-----------------------

*El monto total calculado a imponer a los señores, Julio Alberto Ortiz Simanca identificado con cédula de ciudadanía No. 1.068.658.742, Omar González Castro identificado con cédula de ciudadanía No. 78.077.738 y Jorge Luis Caballero Romero identificado con cédula de ciudadanía No. 11.003.513, por el aprovechamiento y movilización ilícita del producto forestal no maderable (Carbón Vegetal), correspondiente a un volumen de dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho (2.448) kilogramos, consistentes en ciento cuarenta y cuatro (144) bultos del producto, de diecisiete (17) kg cada uno, sin contar con la autorización y/o permiso de la autoridad ambiental para ello, vulnerando así lo establecido en el decreto 1076 de 2015; es de **UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$1.538.656,00).***

Con fundamento a lo anterior y por existir dentro de la presente investigación, pruebas conducentes, no queda duda que los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS**

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513, se constituyen responsables por la contravención de la norma ambiental, por el presunto aprovechamiento y movilización de producto forestal maderable correspondiente a 144 bultos de carbón vegetal con un peso aproximado de 17 kg cada uno, y un total de 2448 kg aproximadamente, sin contar con autorización y/o permiso de la autoridad ambiental, en este caso el Salvoconducto Único Nacional en Línea.

En mérito de lo expuesto esta Corporación,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Levantar medida preventiva de decomiso preventivo de productos forestales maderables correspondiente a 144 bultos de material forestal de carbón vegetal con un peso aproximado de 17 kg cada uno, para un total de 2448 kg aproximadamente, incautados a los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513, legalizada a través de Resolución N°3-1345 de 20 de septiembre de 2023.

ARTÍCULO SEGUNDO: Declarar Responsable a los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513, por el aprovechamiento y movilización de producto forestal maderable correspondiente a 144 bultos de material forestal, carbón vegetal con un peso aproximado de 17 kg cada uno, y un total de 2448 kg aproximadamente, sin contar con autorización y/o permiso de la autoridad ambiental.

ARTÍCULO TERCERO: Imponer a los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513, sanción de **DECOMISO DEFINITIVO** del producto forestal maderable correspondiente a 144 bultos de material forestal de carbón vegetal con un peso aproximado de 17 kg cada uno, y un total de 2448 kg aproximadamente, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Imponer a los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513; sanción de multa correspondiente a **UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$1.538.656,00)** de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de la presente Resolución.

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS**

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

ARTÍCULO QUINTO: Ordénese ingresar al patrimonio y renta de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS los productos forestales decomisados en su condición de recursos naturales no renovables para lo cual se deberá determinar su valoración y utilidad y disponer mediante acta su destino final, el cual deberá ser compatible con la función, misión y objeto de esta entidad como viene explicado.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los productos forestales decomisados se encuentran en el Vivero Agroforestal Mocarí de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Remítase copia del acto administrativo una vez en firme, a la secretaria general y a la Oficina Administrativa y financiera de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, para su competencia y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO: La suma descrita en el Artículo CUARTO se pagarán en su totalidad en cualquiera de las oficinas de la entidad financiera **BANCO DE OCCIDENTE, en la cuenta de ahorros No. 890-04387-0 a nombre de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS**, una vez goce de ejecutoria la presente Resolución y cuyo recibo de consignación deberá presentarse en la Oficina de Tesorería de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS para que se expida el respectivo recibo de caja y obre en el expediente.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La presente Resolución presta merito ejecutivo, por lo tanto, si el valor de la multa no es cancelado dentro del término previsto para ello, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS procederá a hacerla efectiva por jurisdicción coactiva.

PARÁGRAFO: Finalizado el proceso de Cobro coactivo sin que se hubiese logrado el cobro de la sanción impuesta, se procederá a reportar a la Oficina Administrativa y Financiera de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge CVS, a fin de ser reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado – BDME, el deudor y la acreencia insoluta.

ARTÍCULO OCTAVO: Notifíquese en debida forma el contenido de la presente Resolución a los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513 y/o a sus apoderados debidamente constituidos, de conformidad con el Artículo 19 de la Ley 1333 de 2009.

PARÁGRAFO: En el evento de no lograrse la notificación personal se procederá a notificar por aviso en los términos señalados en el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO NOVENO: Contra la presente Resolución procede recurso de reposición el cual podrá interponerse personalmente por escrito ante el Director General de la Corporación

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN
JORGE, CVS**

RESOLUCIÓN No. 3-2422

FECHA: 18 DE JUNIO DE 2024

Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge - CVS, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación.

ARTÍCULO DÉCIMO: Ingresar al Registro Único de Infractores Ambientales – RUIA – a los señores JULIO ALBERTO ORTIZ SIMANCA, identificado con cédula de ciudadanía número 1.068.658.742, OMAR GONZÁLEZ CASTRO, identificado con cédula de ciudadanía número 78.077.738 y JORGE LUIS CABALLERO ROMERO, identificado con cédula número 11.003.513.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Comunicar la presente Resolución a la Procuraduría Judicial Agraria y Ambiental de Córdoba, y para su conocimiento y fines pertinentes en cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 56 inciso final de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



**ORLANDO RODRIGO MEDINA MARSIGLIA
DIRECTOR GENERAL
CVS**

Proyectó: Angie Catalina Velásquez Montes / Practicante Jurídica Ambiental CVS

Revisó: Ángel Palomino / Coordinador Oficina Jurídica Ambiental CVS

Aprobó: Cesar Otero Flórez / Secretario General CVS